



## I

Se plantea en la presente consulta si el consultante tiene derecho o no a conocer determinados datos – nombre, apellidos y dirección postal - de los miembros de la asociación a la que pertenece, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD). Pues bien, exactamente esta cuestión ha sido ya suficientemente resuelta en los informes de 15 de abril y 21 de julio de 2011 y 27 de abril de 2012 de esta Agencia, planteados por el mismo consultante, a los que nos remitimos.

Y reiteramos las conclusiones del informe de 27 de abril de 2012: que no disponemos de una copia completa y fehaciente de los estatutos de la Asociación – sin que pueda considerarse copia fehaciente una fotocopia con la firma del propio consultante; que según indica el mismo, la cuestión ha estado sometida a un procedimiento civil conocido por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Burgos en el PO. 443/2009, que incluso ya ha dictado sentencia. Y si se ha judicializado el asunto, será el órgano judicial el que dé una respuesta a la cuestión planteada. Y que incluso se nos advierte sobre la existencia de un procedimiento penal: el interesado vuelve a referirse el PA 14/2012 tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Burgos.

En cualquier caso, ya en el apartado II del informe de 27 de abril de 2012 estudiábamos el caso planteado, y en particular los artículos 23.e) y 29 de los Estatutos de la asociación en cuestión y recogíamos el criterio de esta Agencia al respecto.

Y este punto puede quedar completado por la reciente **Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 31 de mayo de 2012, recurso 793/2010** que aplica la teoría del interés legítimo, con base en el artículo 7.f) de la Directiva 95/46/CE, a una remisión de correos electrónicos solicitando una asamblea extraordinaria en un colegio oficial. El Fundamento de Derecho Tercero de dicha resolución señala:

**“TERCERO.** Empezando por el segundo de los motivos de la demanda resulta que el artículo 6 de la LOPD tras indicar, con carácter general que: El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. Añade a continuación que:

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal

*(...) cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.*

*Pronunciándose en similares términos el artículo 10.2.b) del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD.*

*Tal y como hemos razonado en nuestra SAN de 15 de marzo de 2012 (Rec. 390/2010) deviene esencial relacionar la mencionada excepción a la prestación del consentimiento prevista en el artículo 6.2 LOPD (y 10.2.b) del RD 1720/2007) con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 95/46, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de datos personales. Y ambos con la interpretación que del apartado f) del mencionado artículo 7 ha llevado a cabo la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 24 de noviembre de 2011.*

*Y ello dado que determina el artículo 7 de la mencionada Directiva 95/46, de 24 de octubre, lo siguiente:*

*Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si:*

*(...)f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del Art. 1 de la presente Directiva.: en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales.*

*Desprendiéndose, por tanto, de la comparación entre los preceptos mencionados ( el artículo 6.2 LOPD por un lado y el artículo 7.f) de la Directiva 95/46, por otro) una importante conclusión: que tal excepción a la prestación del consentimiento en los supuestos en que los datos personales provengan de fuentes accesibles al público (que son las previstas en el artículo 3.f) de la LOPD) se contiene en nuestra normativa interna de protección de datos, más sin que se encuentre prevista, como excepción a la prestación del consentimiento, en la normativa comunitaria de aplicación.*

*El Tribunal Supremo, en los recursos planteados frente a determinados preceptos del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, se cuestionó la adecuación o no al derecho comunitario del mencionado artículo 10.2.b) del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que planteó una cuestión prejudicial respecto de su interpretación.*

*Cuestión en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia con fecha de 24 de noviembre de 2011, que contiene los siguientes pronunciamientos:*

*1. Se opone al artículo 7.f) de la Directiva 95/46 la normativa nacional que, para permitir el tratamiento de datos, sin consentimiento, y necesario para la*



*satisfacción de un interés legítimo (del responsable o del cesionario) exige que se respeten los derechos y libertades del interesado, y además que dichos datos figuren en fuentes accesibles al público, excluyendo de forma categórica y generalizada todo tratamiento que no figure en dichas fuentes.*

*2. El artículo 7.f) de la Directiva 95/46 tiene efecto directo.*

*Dado que en la presente controversia se impone la sanción, precisamente, porque se condiciona la necesidad de consentimiento de los titulares de los datos personales (direcciones de correo electrónico), al hecho de que dichos datos no provienen de una fuente de acceso público, considera esta Sala que tal interpretación, conforme a la doctrina comunitaria expuesta, y sin mayores matizaciones, no puede ya sostenerse.*

*Y ello porque conforme a la repetida Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que los datos figuren en fuentes accesibles al público no es un criterio válido para excluir la necesidad de consentimiento del titular de los mismos, sino que el deben ponderarse dos elementos fundamentales:*

*Si el tratamiento de los datos es necesario para satisfacer un interés legítimo (del responsable de los datos o del cesionario), y si han de prevalecer o no los derechos fundamentales del interesado, esencialmente referidos a su derecho a la protección de datos personales.*

*Ponderación de intereses en conflicto que dependerá de las circunstancias concretas de cada caso y en la que no obstante, sí puede tomarse en consideración, a efectos de determinar la posible lesión de los derechos fundamentales del afectado, el hecho de que los datos figuren ya, o no, en fuentes accesibles al público. Más ello, simplemente, como un elemento más de ponderación.*

*Es posible, en definitiva, y conforme a dicha Jurisprudencia comunitaria, que existan tratamientos de datos personales que no figuren en una de las que nuestra legislación interna denomina "fuentes de acceso público" (artículo 3.f) LOPD y artículo 7 RLOPD) pero que, sin embargo, no requieran el consentimiento de los titulares de tales datos porque su tratamiento sea necesario para satisfacer un interés legítimo del responsable de los mismos, o del cesionario, siempre que se respeten los derechos y libertades del interesado.*

**CUARTO.** *En consecuencia, y aplicando la anterior doctrina (de nuestra reciente SAN 15 de marzo de 2012 Rec. 390/2010) al presente supuesto, tenemos de un lado que el aquí recurrente, según ha quedado probado, no solo era colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y asociado de la Asociación Ingenieros de Telecomunicaciones, sino que además era el cabeza de lista de la candidatura presentada a las elecciones del COIT denominada "COIT.2.0", (folio 41 del expediente) por lo que a tenor de lo razonado en el fundamento jurídico anterior, ostentaría un interés legítimo en el tratamiento de tales datos personales de los integrantes del cuerpo electoral: miembros del COIT y de asociados de la AIT. Interés consistente en*

*comunicar sus propuestas electorales a dichos colegiados y asociados y pedirles el voto”.*

Siendo el asunto planteado similar al propuesto, podría existir en el caso planteado interés legítimo en cualquier asociado *“en el tratamiento de datos personales de los integrantes del cuerpo electoral”*, como dice la sentencia. *“Interés consistente en comunicar las propuestas electorales a dichos colegiados y asociados y pedirles el voto”*. Siempre, claro está, que se cumpla el principio de finalidad, esto es, que los datos sean utilizados sólo para las finalidades lícitas y determinadas especificadas; y el principio de proporcionalidad, accediéndose sólo a los datos necesarios para el cumplimiento de tales finalidades.